



INSTRUCCIÓN 3/2012 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SOBRE DETERMINADAS CUESTIONES RELATIVAS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PARTICULARMENTE EN RELACIÓN CON LA INTEGRACIÓN DE LOS REGISTROS CENTRALES DE PENADOS Y MEDIDAS CAUTELARES, REQUISITORIAS Y SENTENCIAS NO FIRMES Y DE PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

Durante el año 2012 el sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia ha experimentado importantes cambios para mejorar su sistema de gestión y acomodarse a los cambios legislativos que a nivel nacional e internacional se han venido produciendo.

El primero de ellos viene marcado por la modificación del Real Decreto 95/2009 de 6 de febrero, por el que se regula el sistema de registros administrativos de apoyo a la administración de justicia por Real Decreto 1611 / 2011 de 14 de noviembre que introduce, en consonancia con la última reforma del Código Penal, la obligación de anotar en el SIRAJ las penas y medidas seguridad impuestas a las personas jurídicas.

En segundo lugar se completa el modelo organizativo basado en la integración de los registros de penados, medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes y de protección a las víctimas de violencia doméstica y de género, en el que el Ministerio de Justicia ha invertido importantes recursos personales y económicos, evitando que sea necesario repetir la información que debe anotarse en más de un registro. Se prevé que esta nueva funcionalidad esté a disposición de los usuarios el próximo mes de septiembre.

Por último, en el marco del test de compatibilidad del Consejo General del Poder Judicial, se acomoda la información que debe constar en el SIRAJ a lo previsto en la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo de 26 de febrero y la Decisión 2009/316/JAI de 6 de abril, punto de partida para la implantación del sistema europeo de intercambio de datos penales (ECRIS), operativo desde el 27 de Abril de 2012.

La presente Instrucción, cuyo objeto es informar sobre los cambios producidos, aclarar dudas en la gestión del sistema y mejorar el funcionamiento general, se dicta al amparo de lo dispuesto en la Disposición Adicional Novena de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial



y de lo dispuesto en el artículo 21 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, y todo ello con el fin de establecer criterios uniformes y coordinados de actuación con fundamento en los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, vertebradores del cuerpo superior jurídico de secretarios judiciales, como dispone el artículo 452.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

En su virtud dispongo:

1. INTEGRACION DE LOS REGISTROS CENTRAL DE MEDIDAS CAUTELARES, REQUISITORIAS Y SENTENCIAS NO FIRMES, REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA Y DE GENERO, Y REGISTRO CENTRAL DE PENADOS (SIRAJ)

1.1 REGLAS GENERALES

1.1.1 El Ministerio de Justicia está finalizando el desarrollo que permitirá el envío de las sentencias firmes desde los Registros de Violencia Doméstica y de Género y de Medidas Cautelares al Registro Central de Penados, lo que supondrá un importante ahorro de tiempo y trabajo para los órganos judiciales, además de mejorar la calidad de los datos grabados en estos registros.

Para que los envíos de sentencias puedan realizarse es indispensable que los secretarios judiciales operen con **el mismo usuario y la misma contraseña** en las aplicaciones del registro de penados, de protección a las víctimas de violencia doméstica y de género y de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, por lo que debe acometerse el cambio de contraseña, cuando estas sean distintas, antes de la entrada en producción de la integración de los registros.

Hasta el próximo 1 de septiembre, el cambio puede llevarse a cabo entrando en cualquiera de las aplicaciones y cambiando la contraseña de manera que coincida con la correspondiente a la otra aplicación, desde esta fecha solo podrá realizarse a través de la pestaña "seguridad" del portal de integración: <https://rrjj.justicia.es>. Esta opción se encuentra ya disponible.

La entrada en producción de la nueva funcionalidad de registro único determinará el cierre de los accesos actuales a las aplicaciones de Violencia doméstica / Medidas Cautelares y del Registro Central de Penados, por lo que los



usuarios deberán utilizar exclusivamente el acceso del portal de integración que ya tienen disponible en la dirección: <https://rrjj.justicia.es>.

Para que el personal de la oficina judicial pueda hacer anotaciones o actualizaciones en los registros de Penados y Medidas cautelares / Violencia doméstica deberá también tener **el mismo usuario y la misma contraseña en ambas aplicaciones.**

1.1.2 El procedimiento de remisión y grabación de la información penal en el SIRAJ tendrá su origen en el registro para la protección de las víctimas de violencia doméstica, salvo en los casos expresamente señalados, o en el registro de medidas cautelares requisitorias y sentencias no firmes, desde donde se remitirá al registro de penados cuando así pueda corresponder.

Como en anteriores instrucciones se ha señalado, la competencia para cumplimentar el contenido de la información corresponde al personal del órgano que ha dictado la resolución bajo la dirección del secretario judicial, responsable de la veracidad de los datos y de su transmisión. En el caso de sentencias firmes que deban remitirse al registro de penados, la competencia corresponde al órgano que ha dictado dicha sentencia o al órgano con competencia funcional para resolver el recurso cuando este sea el caso, sin perjuicio de la actualización posterior por el órgano con competencia para la ejecución, todo ello en los plazos previstos en el artículo 13.1 del Real Decreto 95/2009, y sin que deba retrasarse la inscripción a la fase de ejecución de sentencia en el caso de sentencias firmes. Debe entenderse por tanto que cuando un tribunal resuelve en vía de recurso, cualquiera que sea este, es el secretario del órgano que resuelve el recurso el responsable de la remisión de la información.

Remitida la información relativa a la sentencia firme al registro de penados el sistema procederá a eliminar esta información en el registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes de forma automática, salvo las medidas cautelares, ordenes de búsqueda o rebeldías que deberán ser objeto de cancelación expresa por el secretario judicial. Las notas correspondientes a la actualización de la información en el registro central de penados correspondientes a la ejecución de la pena deberán ser remitidas:

- a) Directamente desde la aplicación correspondiente al registro de penados excepto en relación con asuntos relativos a violencia doméstica o de género
- b) Desde el registro de protección a las víctimas de violencia doméstica y de género en relación con todos estos asuntos



c) Excepcionalmente la actualización de las notas de violencia doméstica y de género cuya fecha de firmeza sea anterior a la entrada en producción de la nueva funcionalidad deberá realizarse en los registros de penados y de violencia de acuerdo con el mismo procedimiento hasta el momento utilizado.

1.2.- REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA Y DE GENERO

La remisión de datos al registro central de penados no supone su eliminación en el registro para la protección de las víctimas, donde permanecerán hasta que se produzca la cancelación de los mismos en el registro de penados de acuerdo con el artículo 136 del Código Penal. Con carácter general la información deberá grabarse en primer lugar en el registro central de protección a las víctimas de violencia doméstica y de género, ya que tanto las sentencias firmes como las no firmes quedan registradas en el mismo, incluso en los juicios rápidos, y desde allí remitirse al registro central de penados. Este procedimiento será igualmente aplicable si la sentencia es absolutoria y se hubieran dictado medidas de seguridad. El Real Decreto 95 /2009 de 6 de febrero no impone la obligación de grabar los procedimientos de violencia doméstica o de género hasta que no se dicten medidas cautelares, requisitorias, autos de rebeldía o en su caso sentencia no firme condenatoria o absolutoria con medidas de seguridad, por lo que dictada sentencia firme condenatoria, si no se ha grabado el procedimiento al no haberse producido alguna de estas condiciones, la causa deberá grabarse previamente en el registro de protección a las víctimas de violencia doméstica o de género y desde allí remitirse al registro de penados.

Cualquier modificación en los datos personales de los condenados, así como cualquier modificación que afecte a la ejecución de las penas; cumplimiento, liquidaciones, archivo, etc., deberá realizarse a través del registro central para la protección a las víctimas de violencia doméstica y de género, para ser enviado posteriormente al registro central de penados. Como excepción, aquellos procedimientos o notas de condena cuya fecha de firmeza sea anterior a la puesta en producción de la nueva funcionalidad deberán sin embargo ser actualizados de acuerdo con el mismo procedimiento utilizado hasta el momento.

Cuando en el registro para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género existan alias y se considerara que esta información, por cualquier causa, no deba ser remitida al registro central de penados, se procederá primero a su eliminación en el registro central de protección a las víctimas de violencia doméstica y de género. Si la modificación



en el registro de protección a las víctimas de violencia doméstica y de género hace referencia únicamente a medidas cautelares, requisitorias y rebeldías, y no afecta en absoluto a las penas, ni a los datos identificativos de las personas o de los procedimientos, no será necesario hacer el envío al registro central de penados. Si por error se hubiera enviado una sentencia firme al registro de penados cuando aún no es firme, una vez borrada la fecha de firmeza en el registro de violencia doméstica deberán anularse asimismo la correspondiente nota de condena indebidamente grabada en el Registro de Penados.

La cancelación de antecedentes penales en el registro central de penados (Art. 136 del C.P.) determinará la cancelación automática de los asientos vinculados en el registro central de protección a las víctimas de violencia doméstica y de género, permaneciendo estos únicamente a disposición de los tribunales de justicia en el registro central de penados.

1.3 REGISTRO CENTRAL DE MEDIDAS CAUTELARES, REQUISITORIAS Y SENTENCIAS NO FIRMES.

Si se trata de un procedimiento que no ha sido grabado en este registro por no existir con anterioridad medidas cautelares, requisitorias o rebeldías, y se dicta una sentencia de conformidad, por lo tanto firme desde el primer momento, la sentencia se grabará en primer lugar en el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes y desde allí se remitirá al registro central de penados. La inscripción en el registro central de penados determinará la eliminación en el registro de medidas cautelares.

Cuando se haya grabado una sentencia no firme en el registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, producida la firmeza, se enviará la sentencia al registro central de penados, completando la fecha de esta. Cuando la sentencia haya sido recurrida, el envío al registro central de penados y la inscripción de los datos derivados de la revocación o confirmación de la sentencia se llevará a cabo por el órgano con competencia funcional para la resolución del recurso en los términos señalados en el apartado 1.1 **REGLAS GENERALES.**

La anotación, modificación o cancelación de medidas cautelares, requisitorias y rebeldías deberá llevarse a cabo en el registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes.



2.-_ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EUROPEO DE INFORMACIÓN DE REGISTROS CRIMINALES (ECRIS)

El 27 abril de 2012 ha entrado en funcionamiento el Sistema europeo de intercambio de antecedentes penales (ECRIS) como consecuencia de la plena entrada en vigor de la Decisión 2009/316/JAI del Consejo de 6 de abril de 2009 y la Decisión Marco 2009/315/JAI del Consejo de 26 de febrero de 2009, lo que constituye un elemento fundamental para la aplicación de la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo de 24 de julio de 2008, relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias entre los Estados Miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso penal.

El registro central de penados tiene ya en funcionamiento un sistema de petición de información de antecedentes penales de los ciudadanos de otros Estados de la Unión Europea, por lo que los juzgados y tribunales españoles que en razón de los procedimientos que tramiten requieran esta información pueden solicitarlo directamente desde la propia aplicación informática. Los juzgados y tribunales pueden solicitar estos antecedentes, cumplimentando la pantalla correspondiente de la aplicación: *"consulta-nueva petición"*. Cuando la nacionalidad corresponda a un país miembro de la UE se activará una alerta para petición de antecedentes a otro Estado. El registro central de penados cursará la petición y una vez recibida la contestación la remitirá electrónicamente al órgano judicial correspondiente. La entrada en funcionamiento de ECRIS supone la incorporación de todos los Estados de la Unión Europea a este sistema de intercambio de información, mejorando la calidad y cantidad de los datos.

Para el correcto funcionamiento del sistema es fundamental la correcta identificación de las personas sobre las que se realiza la pregunta o sobre las que han sido sentenciadas en España. Es necesario hacer constar al menos: nombre y primer apellido, nacionalidad, localidad y fecha de nacimiento, y cuantos datos identificativos puedan existir, además lógicamente de los datos relativos a la condena y su ejecución. La ausencia de datos, su insuficiencia o el hecho de que puedan ser erróneos darán lugar a su no aceptación por el Estado de nacionalidad y por lo tanto a la imposibilidad de obtener el correspondiente certificado. Se ruega un especial cuidado en este tema.

Cuando se trata de ciudadanos con nacionalidad distinta a la de alguno de los Estados miembros de la UE, el órgano judicial podrá solicitar también las anotaciones penales que puedan constar en otro Estado miembro de la UE, siempre que de la información existente en la causa se derive la posibilidad de que en dicho Estado pueda existir información relevante.



3.- ENTRADA EN VIGOR DEL REAL DECRETO 1611 / 2011 DE 14 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 95/2009 DE 6 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA EL SISTEMA DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Como consecuencia de la última reforma del Código Penal y la posterior aprobación del Real Decreto 1611 / 2011 de 14 de noviembre que introduce la obligación de anotar en el SIRAJ las penas y medidas seguridad impuestas a las personas jurídicas, tanto en el Registro Central de Penados como en el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes, deberán grabarse los datos correspondientes a las personas jurídicas y entes sin personalidad jurídica. Por defecto la aplicación muestra la pantalla de entrada a la grabación de datos correspondientes a personas física, lo que constituirá el supuesto más habitual, ofreciendo la posibilidad de pasar a una pantalla nueva correspondiente a personas jurídicas y entes sin personalidad desde donde se podrán incorporar las informaciones correspondientes a las mismas de una forma sencilla e intuitiva. En todo caso la aplicación incorpora las indicaciones adecuadas y el correspondiente manual de usuario.

4.- NORMAS DE CALIDAD EN LAS INSCRIPCIONES

La información anotada en el registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes sobre la que haya recaído sentencia firme con anterioridad a la integración de los registros y que consecuentemente haya sido remitida directamente al registro de penados no es susceptible de cancelación automática por la propia aplicación en el registro de medidas cautelares como se indica en el punto 1.3. Sin perjuicio de que los órganos judiciales notifiquen cualquier hecho del que tengan constancia que pueda determinar la cancelación de los procedimientos en el registro central de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, estas anotaciones serán dadas de baja progresivamente por la subdirección general de registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, cuando se tenga constancia de la grabación en el registro central de penados de la correspondiente sentencia firme.

El envío de sentencias desde los registros de violencia doméstica y de medidas cautelares al registro central de penados posibilitará en el futuro la cancelación automática de las causas grabadas en registro central de protección de las víctimas de violencia



doméstica y de género/ registro central de medidas cautelares requisitorias y sentencias no firmes cuando se lleve a cabo la cancelación de antecedentes desde el registro central de penados de conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Penal.

Para que el sistema de registro único sea plenamente eficaz, es necesario que los usuarios de la aplicación vinculen correctamente los procedimientos de los distintos órganos que forman parte de una misma causa penal y que todos los órganos que han participado en la tramitación recojan la causa y graben su procedimiento para que el órgano que continúe con la instrucción vincule su propio procedimiento con el inmediatamente anterior. Para ello es necesario que se lleven a cabo dos operaciones con especial atención; en primer lugar buscar en la aplicación procedimientos ya grabados de la causa que se tramita para evitar la duplicidad de registros que se produce cuando la causa se graba ignorando el procedimiento de origen; en segundo lugar, una vez finalizada la tramitación en un juzgado, y cuando este remita la causa a otro para su instrucción o enjuiciamiento, no debe cancelarse el procedimiento en el órgano de origen, eliminando las medidas o requisitorias y dejando sin protección a las víctimas. La correcta vinculación de los procedimientos de la causa debe llevarse a cabo cuando se comience la tramitación de cada uno de los procedimientos en el órgano competente. De esta forma el Registro ofrecerá información veraz sobre el órgano en el que se tramita actualmente la causa, facilitando así la labor de consulta de los órganos judiciales y otros usuarios como los cuerpos policiales y las CC AA. El retraso en la vinculación de procedimiento conlleva asimismo la inhabilitación del sistema de alertas, ya que estas no son recibidas por el órgano que realmente se encuentra tramitando el procedimiento.

Concretando el contenido del párrafo anterior, los órganos instructores deberán recoger por inhibición aquellos procedimientos que se grabaron por los juzgados de guardia, o que deban ser instruidos por otro órgano distinto como consecuencia de las normas de competencia.

Cuando una causa se acumule a otra se utilizará la opción "acumulación", procediéndose al volcado de los datos del procedimiento acumulado a la causa en la que se seguirán sustanciando todos los trámites.

Los órganos enjuiciadores en primera instancia deberán recoger por "elevación" los procedimientos grabados por los órganos instructores, y los órganos que conozcan en segunda instancia deberán utilizar la opción "incoación de recurso" para grabar el resultado de los fallos, cerrando sus procedimientos consignando el motivo adecuado: "estimación", "desestimación" o "estimación parcial" a través de la opción "modificar procedimiento" de la pantalla de actualización.



Los órganos ejecutores utilizarán la opción “incoar ejecutoria” para llevar a cabo las actualizaciones correspondientes a la fase de ejecución, evitando grabar en los supuestos de violencia doméstica y de género las ejecutorias desvinculadas de las sentencias grabadas por el órgano sentenciador.

Cuando se trate de procedimientos que haya dado lugar a inscripciones en las que no se haya comunicado modificación alguna durante los plazos de prescripción establecidos en los artículos 131 y 133 del C.P. el secretario judicial, de oficio o a petición de la Subdirección general de registros administrativos de apoyo a la actividad judicial procederá a verificar, en los términos del artículo 18.5 del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, su estado procesal a efectos de adoptar las medidas oportunas procediendo a su cancelación cuando así resulte necesario. Este apartado es especialmente importante en relación con los procedimientos en situación de archivo o sobreseimiento provisional en el registro para la protección a las víctimas de violencia doméstica y de género o con medidas cautelares antiguas y todavía activas.

5.- FORMACION Y APOYO

Conviene recordar que los manuales de usuario constituyen un elemento imprescindible y complementario de la aplicación informática para obtener todas las ventajas que de la misma se derivan. Por lo tanto su utilización resulta inexcusable para el conocimiento íntegro de las utilidades incorporadas, debiendo los secretarios judiciales de los órganos que deban realizar las inscripciones familiarizarse con ellos y procurar su distribución y conocimiento entre los funcionarios designados para el uso de la aplicación. En todo caso, ante la implantación de la nueva funcionalidad de Registro Único (SIRAJ), los formadores del Servicio de Formación realizarán soporte in situ en las diferentes sedes. Los **materiales didácticos** correspondientes a dicha funcionalidad estarán disponibles en la mediateca de la plataforma de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, accesible desde la dirección <http://aulaenlinea.justicia.es>

En todo caso, desde el CAU del Ministerio de Justicia (teléfono 902 999 724) se prestará cuanta ayuda sea necesaria para facilitar el uso de las aplicaciones y desde la Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, correo electrónico registros.administrativos@mjusticia.es, se aclararán cuantas dudas puedan producirse

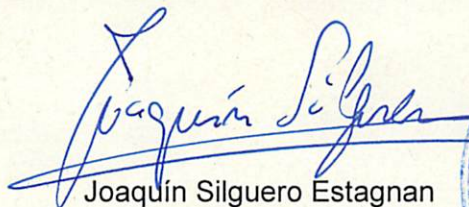


Notifíquese la presente Instrucción a los Secretarios de Gobierno del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, quienes la pondrán en conocimiento de los Secretarios Coordinadores Provinciales, ateniéndose en lo sucesivo a su contenido.

La presente Instrucción entrará en vigor con carácter general al día siguiente de su notificación salvo en lo que afecta a la remisión de datos entre registros que lo hará a partir del momento de la entrada en producción de la nueva funcionalidad de registro único.

En Madrid a 19 de julio de 2012

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA


Joaquín Silguero Estagnan

